



Campesinos escoltados por militares arrancan plantaciones ilegales de coca en San Miguel.

Mauricio Duenas/ EFE

# El año de COLOMBIA

Antes de que finalice 2016, las FARC y el Gobierno van a firmar el acuerdo de paz que pone fin a más de cinco décadas de guerra y encauza un futuro sin violencia

**C**OLOMBIA ha redefinido su futuro. Tras casi cinco años de negociación, los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el presidente Juan Manuel Santos están a punto de firmar el acuerdo que pondrá fin a la última guerra civil del hemisferio occidental y al más complejo y activo rescoldo de la Guerra Fría. También los líderes del otro grupo guerrillero que aún se mantenía activo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han decidido subirse al tren de la Historia y el pasado 31 de marzo anunciaron su decisión de

emprender negociaciones para entregar las armas. El camino será largo y tortuoso. Hará falta ayuda internacional —en enero de este año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad que, una vez firmado el acuerdo, se establecerá una misión de paz para la verificación del alto el fuego y la desmovilización de la guerrilla, y Estados Unidos y Noruega han anunciado la creación de una Iniciativa Global de Descativación de Minas para que el país esté libre de ellas en 2021— y en el interior habrá que buscar respuestas comunes para, por un lado, construir el andamiaje institucional que estructure el nuevo Estado

y, por otro, erradicar definitivamente las bandas criminales y los grupos paramilitares vinculados a la criminalidad y el narcotráfico.

Pero ya está todo apuntalado para construir una nueva Colombia que deje atrás un conflicto de más de 50 años que ha causado cerca de 250.000 muertos, diez millones de desplazados, y condenado a cientos de miles de personas —sobre todo a las minorías indígenas, a los afrodescendientes y a los campesinos— a subsistir en la pobreza y soportar la violencia como algo intrínseco a su existencia. «No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso», dijo el Papa Francisco a las delega-

ciones con un mensaje contundente, imperativo y cargado de simbolismo —fue pronunciado durante su primer viaje a Cuba— que resume el sentir del pueblo colombiano, de Sudamérica y de toda la comunidad internacional.

El texto ya está prácticamente cerrado —se había fijado el 23 de marzo para la firma definitiva, pero el jefe del equipo negociador gubernamental, Humberto de la Calle, y el líder de las FARC, Rodrigo Lodoño Echeverri, alias *Timochenko*, han acordado darse seis meses más para cerrar los flecos sobre las zonas de concentración de los guerrilleros y el alto el fuego bilateral —y se ha estructurado en apartados que contemplan la realidad colombiana como un entramado en el que nadie es responsable pero todos son culpables.

Desde que comenzaron las negociaciones en 2012, se han firmado puntos cruciales como el acuerdo de Justicia Transicional (se establece un sistema independiente creado *ad hoc* y que implica tanto a guerrilleros como a militares, políticos o financiadores de los paramilitares y en el que tan sólo se juzgarán a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio o graves crímenes de guerra) y el de Reparación de las víctimas (se ha creado un organismo para investigar lo ocurrido, la Comisión de la Verdad, al que se le dotará de un 3 por 100 del PIB anual para los procesos de indemnización).

En 2013 se aprobó la Ley de Restitución de Tierra y Reforma Rural, que determina la erradicación de las plantaciones ilícitas de coca, la reorientación en los cultivos y un programa de legalización de tierras imprescindible en un país donde solo uno de cada dos campesinos tiene derechos formales de explotación sobre la tierra que cultiva.

A finales en 2015 fueron acordados los mecanismos para la integración política de los exguerrilleros. La Corte Constitucional colombiana aprobó que podrán hacerlo todos aquellos que se desarmen y no hayan sido condenados por delitos de genocidio.

También el pasado año vio la luz una reforma de las Fuerzas Armadas que reduce los efectivos y, sobre todo, reorienta su función para la paz. Los Planes Estratégicos *Minerva* (del 2012) y *Espada de Honor* (aprobado en 2014 y que deberá ser renovado antes de que acabe el 2016) fijan unas misiones que, además de la defensa exterior, incluyen la de contención de las bandas criminales, la protección de las zonas libre de guerra y la seguridad en infraestructuras críticas, como los oleoductos.

de la cocaína. Al comienzo de la década de los 90, Colombia era considerado un estado fallido.

El Centro de Memoria Histórica de Bogotá (un organismo independiente vinculado al proceso de paz con el fin de reparar el daño causado a las víctimas por cualquier bando) indica que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles; el número de desapariciones entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados de 27.023 y el de



El presidente colombiano junto a los líderes de la delegación gubernamental en La Habana anuncian en septiembre de 2015 el acuerdo de Justicia Transicional.

### TODOS CONTRA TODOS

Para comprender la importancia del proceso negociador y lo que significa es necesario entender la esencia misma colombiana durante el pasado siglo. Las pinceladas dramáticas que tiñeron de corrupción y sangre toda América del Sur y Central (desigualdad social, propiedad latifundista de la tierra, intromisión exterior y falta de espacios para la participación política) aumentaron su intensidad por el cultivo ilícito

asesinados de 150.000. De esta última cifra, el 38,4 por 100 fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8 de la guerrilla y el 10,1 de las fuerzas de seguridad del Estado.

En 1964 se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, como un grupo de autodefensa campesina con ideología marxista-leninista liderado por Pedro Antonio Marín Marín, alias *Tirofijo* (muerto en 2008)

*Los puntos de Justicia a los responsables de genocidio y de Reparación a víctimas fueron los más complejos de aprobar*

## La decisión de la otra guerrilla

EL pasado 31 de marzo, los máximos responsables del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Bogotá anunciaron su firme intención de alcanzar un acuerdo definitivo de paz. Las negociaciones, cuyo inicio no se concretará hasta que la guerrilla libere a todos los secuestrados en su poder, se celebrarán principalmente en Ecuador aunque habrá sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil (las de las FARC se han celebrado en La Habana, y han actuado como acompañantes Chile y Venezuela, y Noruega y Cuba han sido países garantes).

Los puntos de la agenda de negociación prácticamente son los mismos que con las

pero mientras éstos habían reducido considerablemente sus acciones en los últimos cinco años, lo *elenos* se habían reactivado de forma preocupante.

El ELN nació en 1964, casi a la par de las FARC, con una ideología que mezcla cristianismo, marxismo y nacionalismo radical. Con un contenido político mucho más marcado que las FARC (fue fundada por un religioso de tradición guevarista y miembro de la Teología de la Liberación, Camilo Torres), la extorsión y los secuestros han sido su fuente de financiación principal, aunque en los últimos años los vínculos con el narcotráfico han ido *in crescendo*. En este momento, sus frentes más beligerantes se concentran en el circuito



Christian Escobar/Mora/EFE

FARC, aunque el Gobierno ha aceptado una mayor participación ciudadana, uno de los reclamos de los *elenos*. Santos ha querido dar trascendencia a las conversaciones y ha recalado la historia propia que tiene el ELN, pero se ha mostrado tajante a la hora de dejar claro que el modelo de Justicia Transicional creado para las FARC sea prácticamente idéntico para juzgar a los miembros del ELN considerados autores de genocidio.

Las autoridades colombianas estiman que la guerrilla cuenta con unos 1.300 miembros aunque algunos analistas creen que la cifra asciende hasta 2.000. Sin duda, muy inferior a los cerca de 9.000 de las FARC

conocido como ABC (Arauca, Boyacá y Casanare), además de las regiones fronterizas con Venezuela. De hecho, el papel que debía jugar o no Caracas ha sido uno de los mayores obstáculos para conseguir que se iniciase la negociación con el ELN. Allí se resguardan los miembros de la dirección.

Otro de los aspectos que ha retrasado el arranque de las conversaciones han sido las grietas dentro del Comando Central del ELN, en donde había ganado peso Gustavo Aníbal Gironde, alias *Pablito*, en detrimento del líder de la guerrilla, alias *Gabino*. *Pablito* es el comandante del *Frente Domingo Lain*, con gran poder en Arauca y la frontera con Venezuela.

y que en el año 2000 llegó a controlar casi el 40 por 100 del territorio colombiano: todas las regiones surorientales de la selva y buena parte de las llanuras de la base de la cordillera de los Andes. En 2007 tenían cerca de 12.000 combatientes y un fructífero negocio procedente del cobro por proporcionar seguridad a los cultivos de coca, del impuesto a laboratorios y el uso de pistas clandestinas (un informe de la ONU indica que, al inicio de las conversaciones en 2012, las FARC tenían más de 150.000 hectáreas de cultivo de coca). Pero fue precisamente esa clara vinculación con el narcotráfico la que dictó su sentencia.

En 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana suscribió con su homólogo estadounidense, Bill Clinton, el denominado Plan Colombia que aportó importantes cantidades de ayuda militar y presupuestaria para terminar con el narcotráfico y fortalecer el Estado (el pasado 5 de febrero, el presidente norteamericano, Barack Obama anunció su decisión de incrementar la ayuda anual incluida en el Plan Colombia con más de 400 millones de euros para el 2017). Su sucesor, Álvaro Uribe, aplicó una dura política de intervención militar contra la guerrilla (siendo su ministro de Defensa el actual presidente, Juan Manuel Santos) que redujo considerablemente las zonas bajo control de las FARC y, en buena medida, forzó el actual proceso negociador al hacer entender a los líderes de la guerrilla que jamás conseguirían una victoria con las armas. En este momento, las FARC disponen de entre 8.000 y 9.000 combatientes (parte de sus facciones se han desplazado a los vecinos Ecuador y Venezuela por el acoso militar en suelo colombiano).

En 1968, el Estado promulgó una Ley que permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles para proteger sus bienes. Los hacendados rurales y los pequeños industriales instituyeron verdaderos Ejércitos que, en la década de los 80, acabaron muchos de ellos en manos de los narcotraficantes. En los años 90 se creó el grupo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que agrupaba a buena parte de las fuerzas paramilitares y llegó a tener, en total, más de 14.000 efec-



Alto Comisionado de la Paz/EFE

Uno de los grupos de Autodefensas —Héroes de Guaravide— entrega sus armas durante el proceso de desmovilización en 2006.

tivos. Una época en la que Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta y había territorios completos bajo el control de los cárteles de Cali y Medellín. Pero en los primeros años del 2000 los éxitos del Plan Colombia prácticamente eliminaron el control de los narcotraficantes, y en 2005 Álvaro Uribe decretó una Ley de Desmovilización para las AUC con su reinserción en la vida civil. Se disolvieron 23 grupos, pero quedaron pequeños grupúsculos (se calcula que unos 2.000 hombres armados) que no se adscribieron al proceso de desmovilización y formaron lo que hoy se conoce como *Bacrim* o bandas criminales.

### TRANSICIÓN

«Liderar un país en guerra es relativamente fácil; uno muestra los trofeos y la gente aplaude. Hoy es más difícil porque hay que cambiar los sentimientos de la gente, las percepciones, enseñar que, en lugar de clamar venganza, hay que aprender a perdonar. Estamos ante una verdadera transición que requiere concesiones de todas las partes, la aceptación del pueblo y un

respaldo político mayoritario» afirmó en La Habana el presidente colombiano. Los dos últimos aspectos parecen más o menos conseguidos: Juan Manuel Santos, que desde que llegó al poder en 2010 hizo de las negociaciones de paz la bandera de su mandato, fue reelegido por mayoría para el periodo 2014-2018 y, apoyado en su respaldo político, creó la denominada Mesa de Unidad Nacional para impulsar el acuerdo de paz (tiene el apoyo de casi toda la Cámara con excepción del Centro Democrático, fundado en 2013 por el expresidente Álvaro Uribe, y opositor férreo al acuerdo de paz). Fruto de este consenso, el Congreso aprobó el pasado febrero la ley de orden público

*Una misión de las Naciones Unidas supervisará el desarme de la guerrilla*

que da prácticamente vía libre a Santos para negociar los puntos aún pendientes del acuerdo al permitir la creación de zonas de desmovilización y otorgar al presidente facultades para suspender las órdenes de captura sobre los guerrilleros que se mantengan en esas tierras.

Según lo aprobado, las zonas de concentración serán temporales y no deberán estar en áreas urbanas, próximas a la frontera o en tierras donde haya cultivos ilícitos o minería ilegal. Los miembros de las FARC que ingresen en esas áreas acordadas deberán estar identificados, incluso dactilarmente, y harán entrega de sus armas que deberán ser inventariadas.

La actual dirección de las FARC ha dejado claro que su intención no es incorporarse a ninguna formación política existente ni participar en la unión de varias, sino «mantener las siglas y crear un frente amplio». Se llamen como se llamen, lo realmente significativo es que, por primera vez en su historia, las FARC han comprendido que su futuro está en las urnas y no en las armas.

Rosa Ruiz